

C.A. de Santiago

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintitrés.

Proveyendo al escrito folio 5: a todo, téngase presente.

**VISTO:**

Se reproduce la sentencia en alzada, pero en su motivo Trigésimo Séptimo se sustituye el guarismo “\$ 15.000.000.- (quince millones de pesos)”, por “\$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos)”, y se elimina su fundamento Trigésimo Octavo.

Y se tiene además presente:

**1°.-** Que es conocida la dificultad que existe para determinar en forma cuantitativa y económica la compensación del daño moral. Empero, en la necesidad de efectuar su valoración y ante la falta de baremos estadísticos o técnicos suficientemente afianzados, cabe acudir a parámetros que puedan servir como criterios orientadores para esos fines, inspirados en consideraciones de prudencia, de equidad y de experiencia. De esa manera, en la medida de lo posible, ha de propenderse a la consideración de los datos objetivos –los hechos probados- la naturaleza del daño y a la búsqueda de algún grado de proporcionalidad entre la entidad de ese daño y la suma a indemnizar.

**2°.-** Que en cuanto a esto último, considerando que quien demanda reclama el resarcimiento de su propio daño, esto es, se trata de una víctima directa del delito penal cometido en su contra por agentes del Estado, es posible inferir que se ha verificado a su respecto una lesión de especial intensidad, teniendo en consideración la forma en que se sucedieron los hechos, y en particular que el actor fue detenido ilegalmente, torturado de manera reiterada por un extenso periodo, de acuerdo a los hechos que de manera indiscutida asienta el tribunal, lo que permite presumir la afectación que ha padecido. Empero, la regulación correlativa también debe guardar algún grado de correspondencia con determinaciones efectuadas por esta misma



Corte en casos semejantes, motivo por el que la indemnización fijada en primera instancia debe ser aumentada. En tales condiciones, se estima razonable regular esa indemnización en la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000).

Por estas razones, y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables, **se confirma** la sentencia apelada de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol C-33187-2019; **con declaración** que se fija en la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000) la indemnización por concepto de daño moral que deberá pagar el Fisco de Chile al demandante, suma de dinero que devengará los intereses y reajustes conforme a lo establecido en el fallo que se revisa.

**Regístrese, comuníquese y devuélvase.**

**5690-2023**



Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V., Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. y Abogada Integrante Bárbara Vidaurre M. Santiago, tres de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a tres de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

